
FERNANDO ANAYA GARCIA
Juan Manuel Caloto Carpintero
Javier Gómez Santos
PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES

CARLOS PEÑA RECH, ANTONIO ÑUDI TORNERO
(URBE)
CALLE PADILLA Nº 19 – 1º IZQDA.
28006 MADRID
MADRID

Cliente:	AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE (GUADALAJARA)	Ref.:	
Contrario:	AYUNTAMIENTO MECO		
Organo:	JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 25 MADRID		
Procedimiento:	EJECUCION TITULOS JUDICIALES N º 27-17		
M/Ref.:	F-2012/4998		
Letrado	CARLOS PEÑA RECH, ANTONIO ÑUDI TORNERO (URBE)	Ref.:	

MADRID , 18/10/2017

Adjunto le remito el último trámite procesal en el asunto arriba referenciado.

18/10/2017 DILIGENCIA ORDENACION 4998 F 27-17 NOT LEXNET 18-10-17. A SSª
RESOLVER



Mensaje LexNET - Notificación

Mensaje

IdLexNet	201710172590894	
Asunto	D.O. alegaciones al traslado incidente ejecución sentencia instado (F.Resolucion 17/10/2017)	
Remitente	Órgano	JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 25 de Madrid, Madrid [2807945025]
	Tipo de órgano	JDO. DE LO CONTENCIOSO
	Oficina de registro	OF. REGISTRO Y REPARTO CONTENCIOSO/ADMTVO [2807900012]
Destinatarios	ANAYA GARCIA, FERNANDO [1193]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
Fecha-hora envío	17/10/2017 18:50	
Documentos	5218737_2017_I_120562061.RTF(Principal)	
	Hash del Documento: b0b76bb98f3547ce845098800159291a1ada9e31	
	5218737_2017_E_12582325.ZIP(Anexo)	
	Hash del Documento: 8f4824b917294285f64f0b4bfaa89e5db5924bcf	
Datos del mensaje	Procedimiento destino	D.O. alegaciones al traslado incidente ejecución s N°: 0000027/2017 N° Pieza: 01
		Ejecución de títulos judiciales N°: 0000027/2017
	Detalle de acontecimiento	D.O. alegaciones al traslado incidente ejecución sentencia instado (F.Resolucion 17/10/2017)
	NIG	2807945320120023161

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
18/10/2017 10:40	ANAYA GARCIA, FERNANDO [1193]-Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid	LO RECOGE	
18/10/2017 08:10	Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (Madrid)	LO REPARTE A	ANAYA GARCIA, FERNANDO [1193]-Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.



**JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 25 DE MADRID**
C/ Gran Vía, 19 , Planta 6 - 28013
Tfno:



(01) 31205620619

NIG: 28.079.45.3-2012/0023161

**Procedimiento: Pieza. Incidentes en fase de ejecución 27/2017 - 01 (Ejecución de
títulos judiciales)**
GRUPO 2

Notificación telemática de la resolución 120556214_D.O. alegaciones al traslado incidente ejecución sentencia instado de fecha 17/10/2017 y 2 adjunto/s a esta notificación dentro del archivo comprimido 120556214_D.O. alegaciones al traslado incidente ejecución sentencia instado.zip que se anexa.

En Madrid, a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

Incidentes en fase de Ejecución 27/2017

(Ejecución Títulos Judiciales)GRUPO II

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 25 DE MADRID

DON JUAN CARLOS ALBERT GÓMEZ, Letrado del ICAM (25515), actuando en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Meco, representación que ya tengo debidamente acreditada en los autos al margen referenciados, ante ese juzgado comparece y como mejor proceda en derecho

D I G O :

- I. Que con fecha 20 de septiembre de 2017, mediante Diligencia de Ordenación de esa misma fecha, se le ha dado traslado a esta parte del escrito presentado de contrario promoviendo Incidente de Ejecución, en el que se solicita la nulidad del Decreto nº 1269/2017 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Meco, de 8 de agosto de 2017.
- II. Que dentro del plazo legal concedido, se procede a presentar **ESCRITO DE ALEGACIONES** contra el anterior incidente, en los términos que a continuación se exponen.

PRIMERO.- Competencias sobre Caminos Rurales. El presente incidente pretende la nulidad del Decreto 1269/2017, aprobado el 8 de agosto de 2017 por el Ayuntamiento de Meco, cuyo objeto no fue otro sino la adopción de medidas para regular y garantizar el uso adecuado de un camino rural, y cuya competencia le está expresamente atribuida al municipio de Meco (al menos en la parte que discurre por su circunscripción).

Por si hubiera la menor duda sobre la competencia municipal sobre ese tipo de vías simplemente hay que referirse a la profusa doctrina jurisprudencial, que ha venido reconociendo unánimemente esa competencia, y a tal efecto es especialmente clarificadora la sentencia dictada por este mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en Sentencia de 18 de noviembre de 2010, que ha sido confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2014.

De forma resumida, la anterior doctrina atribuye a los municipios las competencias y funciones de conservación de estos caminos, mediante los actos de tutela y defensa que a tal fin consideren oportunos, y el Ayuntamiento de Meco, en consonancia con dicha competencia, ha tomado una serie de medidas tendentes a garantizar el correcto uso de dicho camino rural, mediante la ejecución de una serie de obras y trabajos tendentes precisamente a salvaguardar la correcta utilización de dicha vía, que no tiene otra finalidad sino la de un camino creado para las facilitar las operaciones de concentración parcelaria, y permitir exclusivamente el acceso de los propietarios a las fincas agrícolas.

La sentencia del TSJ de 9 de marzo de 2016 fue cumplida de forma inmediata, procediéndose a la retirada de todos los obstáculos que impedían la libre circulación de vehículos, y de ello ha quedado plena constancia en los documentos gráficos aportados al procedimiento, y por ello sería absolutamente inadmisibile tanto desde el punto de vista legal y administrativo como desde el punto de vista procesal, que año y medio después de dicha sentencia, y año y medio después de su cumplimiento, el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre pretenda interpretar que la citada sentencia tiene una validez indefinida, que ya nunca más el Ayuntamiento va a tener competencias para regular el uso indebido e irregular que de dicho camino rural se viene haciendo por parte de los vecinos de Villanueva de la Torre, y que cualquier obstáculo o actuación que sobre dicha vía efectúe el ayuntamiento de Meco estará condenada irremediabilmente al fracaso, a tenor de los términos contemplados en la sentencia dictada por el TSJ.

Sin embargo esta parte se opone radicalmente a la anterior interpretación, entiende que después de haberse cumplido escrupulosamente con los términos de la sentencia, y haber retirado los obstáculos que impedían la libre e indiscriminada circulación de vehículos, a continuación, año y medio después, nada le impide al Ayuntamiento de Meco seguir ejerciendo sus competencias sobre ese camino, ya que la sentencia, como más adelante exponremos: a) constata la evidencia de que se trata de un camino rural; b) con el uso autorizado exclusivamente a los propietarios de los predios colindantes; c) en ningún momento valida ni da carta de naturaleza a la circulación libre e indiscriminada de vehículos por dicho camino, y d) el único reproche legal y argumental que utiliza para estimar el recurso de apelación, no es otro sino el del principio de lealtad institucional, por no haberse comunicado previamente al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre las actuaciones que se iban a llevar a cabo.

Por tanto ni la sentencia del TSJ altera en modo alguno la calificación y el uso restringido que se le atribuye a un camino rural, ni limita en modo alguno las competencias municipales del Ayuntamiento de Meco sobre dicho camino.

SEGUNDO.- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TSJ. Tal y como ya apuntábamos, es absolutamente fundamental recordar que en el Fallo del TSJ de Madrid, se viene a señalar de forma incontestable y textual ***“que el camino en cuestión es un camino rural y no una carretera y que es competencia del Ayuntamiento de Meco regular los usos de los caminos rurales de su municipio,...”*** aunque se precisaba - y ese era el motivo de la estimación del recurso-, que esa regulación debió hacerse respetando los principios de procedimiento y lealtad institucional.

Por tanto, para dirimir el presente incidente, es absolutamente imprescindible recordar el contenido de la Sentencia del TSJ, y de los fundamentos de derecho que se exponen en la misma, ya que de no hacerlo así, y de atenderse las pretensiones deducidas del incidente promovido por el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, este procedimiento podría derivar en una diabólica e indefinida interpretación, convirtiendo por la vía de hecho un camino rural en una carretera, extremo éste que en absoluto se adecuaría a los términos de la sentencia.

a) Consideración de Camino Rural.- El fundamento segundo de la sentencia del TSJ, es plenamente ilustrativo del sentido e intención que subyace en la sentencia dictada, sin cuya consideración difícilmente pueden interpretarse los términos y sentido de la misma, lo cual evita las interpretaciones interesadas que ahora se pretende de contrario.

En dicho fundamento segundo el TSJ desestima el primer motivo de la apelación invocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, que consideraba que el camino objeto de polémica no era un camino rural, pretensión ésta que sin embargo el TSJ rechaza con toda rotundidad, y viene a señalar que:

- Queda suficientemente acreditado que el camino en cuestión es un camino rural.
- Que no se trata de un camino vecinal.
- Es un camino creado para las operaciones de concentración parcelaria, para el acceso a las fincas agrícolas.
- Y siendo un camino rural queda bajo la competencia de los Ayuntamientos determinar el uso de dicho caminos.

Dicho lo anterior, sería evidente que la pretensión que persigue el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, tanto en los términos contenidos en su escrito de ejecución de sentencia, como en el presente incidente de ejecución solicitando la nulidad del Decreto, son absolutamente contrarios a los términos contemplados en la sentencia del TSJ, ya que, su pretensión no es otra sino utilizar de forma indebida e irresponsable un camino por el que sólo pueden discurrir los propietarios de los predios rústicos y los vehículos agrícolas, pretendiendo convertir dicha vía en una carretera de conexión entre ambos municipios, y que sus vecinos vienen utilizando para acceder a la N-II.

Valiéndose de la textualidad de la sentencia, en la que *“...se ordena reaberturar el tráfico rodado del citado camino en las circunstancias previas existentes a la actuación impugnada...”*, el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre pretende reformar y modificar, por la vía de hecho, la calificación de camino rural no solamente desautorizando las propias disposiciones contenidas en la sentencia, cuyo cumplimiento ahora curiosamente reclaman, sino obviando los numerosos informes jurídicos aludidos y constatados en la sentencia, emitidos por la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y aportados en autos, que establecen que *“El uso de este camino está destinado para dar entrada y salida a las nuevas fincas de reemplazo, originadas por la concentración parcelaria...”*.

- b) Temporalidad de la sentencia.-** Esta parte sostiene que la validez de la sentencia y su repercusión en el tiempo, termina y finaliza con el cumplimiento de los términos recogidos en la misma, referidos exclusivamente a la retirada de obstáculos que impedían la libre circulación, referidos al momento de la interposición de la demanda.

Es evidente que la sentencia se acató voluntaria y pacíficamente, y se adoptaron de forma inmediata las medidas tendentes a la retirada de obstáculos, y **prueba incontestable de ello no es sino que hasta el 19 de junio de 2017 es decir año y tres meses después de la sentencia, y un año después de declararse la firmeza de la sentencia y el archivo de las actuaciones, es cuando de contrario se solicita la ejecución de la sentencia, alegando la existencia de badenes, peraltes, suelo irregular, etc.,** Es evidente que esas circunstancias se producen y son consecuencias de actuaciones posteriores al cumplimiento de la sentencia, y responden exclusivamente a las necesidades de regulación y mantenimiento del camino cuyas competencias están atribuidas al Ayuntamiento de Meco, ya que **de no haber sido así con total seguridad se habría solicitado de forma inmediata la ejecución de la sentencia y sin embargo ha transcurrido más de un año desde la firmeza de la sentencia sin actuación procesal alguna.**

La anterior afirmación no es en absoluto una presunción o elucubración gratuita que esta parte interesadamente está argumentando, sino que es una constatación incontestable del fiel e inmediato cumplimiento de la sentencia. Como antes señalábamos, el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre - a la vista del uso indiscriminado que sus vecinos viene haciendo de ese camino rural para acceder a la N-II -, habría recibido cientos de quejas y reclamaciones desde el primer día y habría solicitado la inmediata ejecución, al día siguiente de adquirir firmeza la sentencia. El no haberlo hecho durante más de un año, supone que esos obstáculos se retiraron, el tráfico descontrolado e indebido invadió de nuevo el camino rural, y pasado un año desde entonces, el Ayuntamiento de Meco, como no puede ser de otra forma, y en uso de sus competencias, siguió adoptando las medidas que cree oportunas y necesarias para resguardar el uso del camino y efectuar las labores necesarias para su conservación y mantenimiento.

Habría que preguntar a los dueños de las fincas rústicas, y en concreto a los de las fincas situadas en el municipio de Meco si se les ha restringido o limitado en algún momento su acceso y el de su maquinaria y vehículos agrícolas a sus propiedades, o si por el contrario su actual queja se refiere precisamente al irregular e incesante acceso a dicha vía de multitud de vecinos de Villanueva de la Torre, ninguno de ellos propietarios de predios rústicos colindantes con el camino.

Únicamente estos propietarios, y sólo ellos, son los que pueden acceder a dicho camino, y por tanto son los únicos que pueden recurrir las decisiones municipales que afectan a sus derechos de acceso al camino, efectuando los reproches y reclamaciones al Ayuntamiento de Meco que consideren oportunas, y sin embargo nos encontramos por un lado, con la inexistencia de queja alguna de esos propietarios, y por el otro con la pretensión de un municipio, en este caso el de Villanueva de la Torre, que no solamente está empeñado en sustituir por la vía de hecho la calificación de la vía rural en carretera, sino que se convierte en adalid y defensor de unos vecinos que han adoptado la ilegal costumbre de circular por un camino rural de forma continua e indiscriminada, a sabiendas que dicha circulación es completamente irregular, a sabiendas que es un camino rural cuyo uso es exclusivo de los propietarios de los predios colindantes (tal y como la propia sentencia se ha encargado de señalar), y a sabiendas de que dichos caminos no guardan las mínimas garantías de seguridad (no tienen señalización, ni líneas intermedias, ni arceles, etc.), con los consabidos y graves accidentes que ello ha venido provocando.

La pretensión del presente incidente, así como el de ejecución de sentencia, no es otro sino la de convertir por la vía de hecho un camino rural en una carretera de circulación libre e indiscriminada, obviando los procedimientos administrativos y legales existentes para tal fin, y simplemente valiéndose de la sentencia del TSJ, cuyo único argumento para su estimación fue el incumplimiento del principio de lealtad institucional, pero que en absoluto validaba o alentaba el cambio de uso del camino rural, sino exactamente todo lo contrario.

- c) **Obras nuevas.**- Tal y como el propio recurrente señala en su hecho quinto, las obras que ahora se cuestionan son nuevas obras iniciadas en el mes de agosto de 2017, que por tanto nada afectaría a la sentencia del TSJ, la cual se limitó a ordenar la eliminación de los obstáculos que impedían la circulación, “**en aquéllas fechas**”, extremo éste que, como ya hemos reiterado, se cumplió de manera escrupulosa, y prueba de ello es la inexistencia de queja o iniciativa procesal alguna en al menos un año desde que la sentencia adquirió firmeza.

Si por tanto estamos ante la evidencia de unas nuevas obras, que el Ayuntamiento de Meco está afrontando dentro de sus competencias sobre el camino rural, éstas no pueden ser objeto de reproche, o, al menos, no pueden serlo en el seno del presente procedimiento, cuando ya ha transcurrido más de un año desde su firmeza, y cuando su cumplimiento exigía una inmediata actuación del obligado a hacerlo.

TERCERO.- Lealtad institucional. Dicho lo anterior, y habiéndose constatado el perfecto cumplimiento de la sentencia, se viene a alegar de contrario la invalidez y nulidad del Decreto de 8 de agosto de 2017 aprobado por el Ayuntamiento de Meco, justificando dicha nulidad en la ausencia previa de las medidas adoptadas con el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, habiéndose incumplido, según dicha alegación, el principio de lealtad institucional contemplado en la Ley 40/2015 de 1 de octubre.

A este respecto, y con independencia de las consideraciones que más adelante se expondrán, resultaría evidente que la anterior argumentación, de ser apropiada, **debería ser objeto de un procedimiento procesal distinto del actual, ya que sería del todo improcedente utilizar la vía incidental de un procedimiento de ejecución de sentencia, para atacar este o sucesivos Decretos**, distintos del que en su día propició la demanda, que ha sido aprobado tres años después, y todo ello por mucho que el contenido del mismo se refiera a labores de mantenimiento del camino rural.

En absoluto se puede admitir, como se pretende de contrario, que cualquier decisión que el Ayuntamiento de Meco adopte sobre el discurrir del camino vecinal por su municipio, quede permanente e indefinidamente condicionado a la sentencia dictada por el TSJ de 9 de marzo de 2016, se haya o no cumplido con el principio de lealtad institucional, ya que ese extremo, en su caso, deberá dilucidarse en el procedimiento que corresponda a cada decisión o decreto concreto.

Dicho lo anterior, debemos analizar el formalismo contemplado en el Decreto cuya validez ahora se cuestiona, para constatar el perfecto cumplimiento del principio de lealtad institucional recogido en la Ley 40/2015.

a) **Comunicación previa.** De la propia textualidad del Decreto 1269/2017, aprobado por el Ayuntamiento de Meco, concretamente en su apartado segundo, se señala que:

“SEGUNDO: Dentro del principio de lealtad institucional y cooperación interadministrativa que rigen entre las Administraciones de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público, póngase a dichos efectos en conocimiento del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre”.

La anterior decisión se le comunica al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre con fecha 11 de agosto de 2017, es decir tres días después de la emisión y aprobación del Decreto, y antes de que se inicie cualquier tipo de actuación en el camino rural, y se le notifica con objeto de que haga los comentarios o consideraciones que estime oportunas e, incluso, para que presente los recursos que tenga a bien, para anular e invalidar dicho Decreto.

El cumplimiento del artículo 140, a la vista de las anteriores consideraciones se habría cumplido de forma escrupulosa, dado que: a) se ha comunicado previamente a la otra administración local las actuaciones que se pretenden acometer; b) se ha solicitado su cooperación y colaboración para afrontar dichas actuaciones, haciéndose especial hincapié en el principio de **lealtad institucional y cooperación administrativa**; y c) mediante la anterior comunicación se le está dando audiencia al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre para que, si así lo considera conveniente, defienda los intereses de los vecinos que pudieran resultar afectados.

Dicho todo lo anterior, no podemos olvidar el resto de normas y contenidos contemplados en el CAPITULO II de la citada Ley 40/2015, referido exclusivamente al deber de colaboración, que no solamente está regulado por el anterior artículo 140, sino también, y fundamentalmente por el artículo 142.

El artículo 142 dispone como primera técnica de colaboración, ***“el respeto al ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias”***, para a continuación reiterar en el deber de ***“facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad que vayan a desarrollar en el ejercicio de sus competencias”***.

No se puede reprochar en absoluto que el Ayuntamiento de Meco haya incumplido con sus deberes de colaboración o lealtad institucional, cuando pública y expresamente le comunica sus planes de ejecución de trabajos de saneamiento y mantenimiento de la parte de un camino rural que discurre por su municipio (el de Meco), lo hace con anterioridad al inicio de las citadas obras, y le da la herramientas para que puedan opinar, oponerse, recurrir, etc., sin que ninguna de ellas sea utilizada.....

- b) Acto administrativo distinto del que propició la demanda y sentencia anterior.** Tal y como venimos refiriendo, el Decreto aprobado por el Ayuntamiento de Meco el 8 de agosto de 2017, que contempla los trabajos necesarios para restringir el tráfico rodado indiscriminado, se publica tres años después del Decreto que fue objeto de la sentencia estimatoria del TSJ, y un más de año después de que la sentencia hubiera adquirido firmeza.

Es evidente que la sentencia del TSJ no prohíbe ni limita en forma alguna las competencias del Ayuntamiento de Meco sobre el camino rural (al menos en la parte que discurre por su municipio), sino todo lo contrario, y es dentro de esas competencias donde la corporación municipal toma las decisiones que considera oportunas.

El Decreto 1269/2017, como cualquier acto administrativo puede ser atacable por las vías y procedimientos legales habilitados al respecto, y así se contempla en el propia notificación del Decreto, pero en absoluto se puede pretender que la Sentencia del TSJ actúe, años después, como impedimento legal indefinido, que impide que el Ayuntamiento de Meco pueda tomar las decisiones que crea convenientes dentro de las competencias que tiene asignadas.

Si por tanto lo que se pretende de contrario es impugnar el Decreto, bien mediante el recurso de reposición, bien directamente mediante el recurso contencioso administrativo, deberá hacerlo en los plazos y en la forma legalmente establecida, pero en ningún caso puede pretender aferrarse indefinidamente a una sentencia, cuyos efectos únicamente se referían a las actuaciones anteriores a la fecha de interposición de la demanda en marzo de 2013, y que en absoluto limitan las competencias del Ayuntamiento de Meco.

En definitiva, el Decreto de 18 de agosto de 2017 es un acto administrativo independiente y singular, que sólo puede ser impugnado en el entorno jurídico de su efectos y competencias, y no haciendo valer una sentencia, cuyos efectos no le alcanzan, y que, en cualquier caso, fue cumplida de forma escrupulosa por el Ayuntamiento de Meco.

Por todo ello,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado **ESCRITO DE ALEGACIONES** en tiempo y forma, lo admita, y de acuerdo con lo expuesto se desestimen las pretensiones deducidas de contrario en el incidente de ejecución.

Por ser de justicia, que solicito en Madrid a 16 de octubre de 2017

**Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 25 de Madrid**
C/ Gran Vía, 19 , Planta 6 - 28013
45011640
NIG: 28.079.45.3-2012/0023161


(01) 31205562149

Pieza. Incidentes en fase de ejecución 27/2017 – 01
(Ejecución de títulos judiciales) GRUPO 2

Demandante: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE
(GUADALAJARA)

PROCURADOR D. FERNANDO ANAYA GARCIA

Demandado: AYUNTAMIENTO DE MECO

LETRADO D. JUAN CARLOS ALBERT GOMEZ

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Letrado de la Admón. de Justicia D. JOSÉ BONIFACIO MARTÍNEZ ARIAS

En Madrid, a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

Por recibido el anterior escrito del LETRADO D. JUAN CARLOS ALBERT GOMEZ, actuando en nombre y representación de AYUNTAMIENTO DE MECO, únase a las actuaciones y quede sobre la mesa del proveyente para dictar la Resolución que proceda.

La presente resolución, de la que se pasa a dar cuenta a S.Sa., no es firme y contra la misma puede solicitarse revisión ante el Magistrado-Juez en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente a su notificación.

Lo acuerdo y firmo, Doy fe.

EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA